



Boletín informativo trimestral sobre derechos humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Este boletín muestra un análisis sobre los hechos mas relevantes en materia de derechos humanos. La CCEEU y el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario han recopilado esta información con base en los informes de situación emitidos por las distintas organizaciones que la componen.

MIRA LO QUE HAY:

Crisis humanitarias en los territorios mas afectados por el conflicto armado - Pág. 1

Crisis humanitarias y de DDHH en los nodos - Pág. 2

Análisis especial de crisis humanitarias y de DDHH- Pág. 11

Así se ha pronunciado la CCEEU - Pág. 13

CRISIS HUMANITARIAS EN LOS TERRITORIOS MAS AFECTADOS POR EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

Las problemáticas regionales acumuladas y expresadas en acciones claras en contra de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz, la militarización y la re-paramilitarización de los territorios, el exterminio de los liderazgos sociales, el impulso de la agenda neoliberal y corporativa del gobierno a favor de los grandes capitales nacionales y transnacionales, agravadas por los problemas sociales y económicos derivados de la pandemia y la perturbadora presencia de tropas de guerra norteamericanas, tienen expresiones particulares en cada uno de las territorios que hacen parte de los nodos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y de los que dan cuenta las organizaciones que luchan contra estas problemáticas.

Los defensores/as de derechos humanos arriesgan su vida y en estas difíciles condiciones siguen reclamando la implementación de los acuerdos de paz, el impulso a la transformación democrática de los territorios, planes de desarrollo con enfoque territorial, ampliación de la participación política para las regiones y las víctimas, planes alternativos de inclusión económica para la sustitución de cultivos, desmonte de las estructuras paramilitares y reformas democráticas de las fuerzas armadas, y rendición de cuentas de todos los que han vulnerado los derechos humanos ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, incluidas también la reactivación de la vía negociada con las demás insurgencias activas.

En este boletín los delegados y delegadas territoriales de los Nodos que hacen parte del Comité Operativo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) dan cuenta de las afectaciones a los derechos humanos, esperando sumar esfuerzos para superar la grave situación humanitaria que se vive en cada uno de ellos.

UN HOMENAJE ACOMPAÑA NUESTRO LOGO

Marco Rivadeneira mantuvo su compromiso en el apoyo a las comunidades y organizaciones campesinas del Putumayo.

En este empeño, el pasado 19 de marzo en la Vda. Nueva Granada, sur de Puerto Asís, fue asesinado por estructuras criminales funcionales a un modelo que se lucra de la guerra (dos semanas después de ocurrida la Mesa por La Vida con la ministra del Interior).

Durante este año, nuestros boletines trimestrales serán un homenaje a su lucha y su compromiso siempre presente en nuestro esfuerzo por alcanzar la paz.



Imágen tomada de: www.proantioquia.org.co

Nodo Antioquia

CRISIS HUMANITARIAS Y DE DDHH EN LOS DISTINTOS NODOS DE ACTUACIÓN DE LA CCEEU

Ocupando el segundo lugar con mayor número de agresiones a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en los últimos años, el departamento de Antioquia alcanza los primeros meses del 2020 con diecisiete homicidios, dos de ellos durante la cuarentena y en un solo día (17 de abril) de dirigentes sindicales y campesinos del Bajo Cauca (una de las zonas más conflictivas del departamento debido a los intereses geoestratégicos de los diversos actores armados).

Al igual que el Bajo Cauca, en el Nordeste la presencia de actores armados no estatales es amplia pues confluyen las AGC, “Los Caparros o Caparrapos”, el ELN, la “Oficina del Valle de Aburrá”, “Alianza Criminal del Norte” y “Libertadores del Nordeste” como también se ha denunciado la presencia de más de 350 grupos paramilitares en las 16 comunas de Medellín y los cinco corregimientos. La respuesta institucional para dar solución a esta situación ha sido nula. Desde la CCEEU Nodo Antioquia y el Proceso Nacional de Garantías, se ha visibilizado alertando sobre lo que se está presentando en el Bajo Cauca, Norte de Antioquia y Nordeste Antioqueño pues, los municipios controlados por la VII División del Ejército, se han convertido en una de las regiones con mayores casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y asesinatos de reincorporados de las FARC y sus familiares.

En cuanto a la situación en medio del COVID-19, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la **Corporación Jurídica Libertad - CJL**, amenazas individuales, colectivas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, desapariciones forzadas y reclutamientos forzados, - incluyendo NNA-, agresiones individuales, microtráfico extorsiones, trata de personas, control del trabajo sexual son formas de vulneración que se han incrementado con la disputa del territorio, llevándolo a una crisis humanitaria que se acentúa con el aislamiento obligatorio.

En este contexto, el ESMAD, ha encontrado en la represión desbordada, la respuesta ante las protestas de la población por falta de comida. A esto se suma la acción masiva de la Policía Nacional de imponer comparendos masivos de valores descomunales a personas en situación de vulnerabilidad y sin una pedagogía clara, lo que ha llevado a detenciones arbitrarias, tratos denigrantes y extorsiones.

Desde la Campaña **“No Más Derechos Vulnerados por los Uniformados”**, denunciaremos que la doctrina militar sigue determinando la actuación arbitraria de la Fuerza Pública que de manera deliberada lleva a cabo graves vulneraciones a los derechos humanos en el marco de las protestas y movilizaciones sociales, pero también en la vida cotidiana de las y los ciudadanos

Informales

lugar donde se encuentran personas no sistematizadas

Para focalizar con carácter diferencial debido a sus altos índices de pobreza y vulnerabilidad.

Estrategias Diferenciales

- “Barridos de ciudad” por barrio, caracterizando el mayor número de personas posible.
- **Contacto con grupos ilegales que controlan el territorio para articular la atención territorial.**
- Asistencia humanitaria: Nutricional, Psicosocial y en Derechos Humanos.
- Sistema de monitoreo especializado en seguimiento a personas vulnerables caracterizadas.
- Tomas barriales (Cultura, Educación, Salud, Familia, Etc.)

Alcaldía de Medellín

En abril, desde el Nodo Antioquia se denunció la estrategia de la Alcaldía de Medellín titulada “Riesgo Social en Medellín Covid-19” en la cual se articulaba la distribución de asistencia alimentaria con estructuras criminales.

Si bien, funcionarios de la Alcaldía han señalado que ese documento es falso, se ha coincidido con la Oficina del Alto Comisionado en que es oficial. Aun no se han obtenido respuestas de la Alcaldía

Aunado a esto, es una realidad de vieja data que en el control territorial de los barrios populares de Medellín, hay niveles importantes de connivencia con la fuerza pública, situación que las administraciones locales han conocido.

Imágen tomada de: <https://twitter.com/zapatajuanf/status/1251685768663314433>

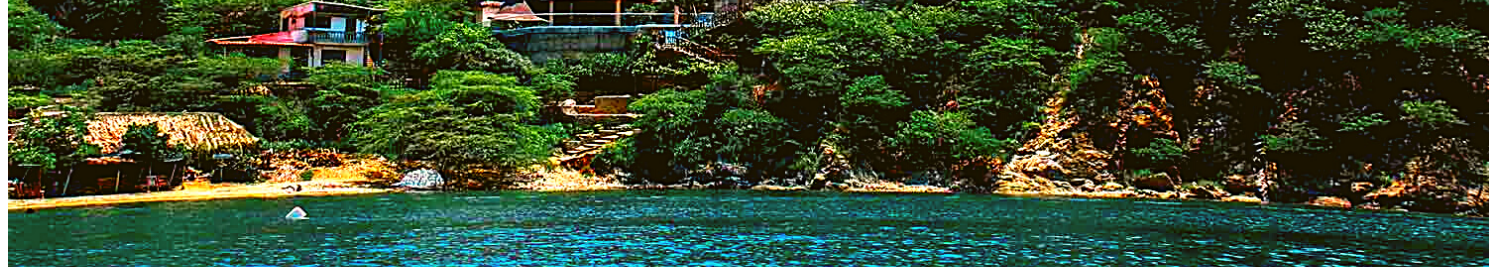


Imagen tomada de www.expotur.com.co

Nodo Caribe

CRISIS HUMANITARIAS Y DE DDHH EN LOS DISTINTOS NODOS DE ACTUACIÓN DE LA CCEEU

ALGUNOS CASOS RECIENTES DE AGRESIÓN AL MOVIMIENTO DE DDHH

11 de mayo de 2020, el líder social Juan Evangelista Martínez García recibió amenazas de muerte a través de una llamada telefónica que recibió su padre. Días atrás hombres extraños habían estado merodeando su parcela ubicada en área rural de Barranquilla.

24 de abril de 2020, fue asesinado en la Vereda Calabazo en zona rural de Santa Marta el líder ambientalista Alejandro Llinás, quien desde hace varios años se había opuesto a la implementación de proyectos turísticos en la Sierra y había denunciado ante las autoridades amenazas contra su vida.

También en el mes de abril de 2020 circularon panfletos amenazantes en contra de mesas de víctimas y organizaciones sociales y de derechos humanos en la Guajira.

**Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos
Seccional Atlántico**

NODO CARIBE- CCEEU

En la región que cobija los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Cesar y La Guajira, se han venido fortaleciendo dos estructuras paramilitares principalmente: 1) heredera del antiguo Frente “Resistencia Tayrona”, conocida como “Los Pachencas” o “Conquistadores de la Sierra”, conformada en su mayoría por familiares del ex jefe paramilitar Hernán Giraldo, alias “El Patrón” o “El Taladro”; 2. Las AGC, el grupo neo-paramilitar más fuerte del país, las AGC, el cual ha mantenido y consolidado alianzas estratégicas con grupos de criminalidad organizada de toda la región. Este último, dedicado al control político, social y de economías ilegales, ha establecido alianzas con carteles de droga internacional, como el cartel de Sinaloa con el fin de aumentar su poderío en el resto del territorio nacional. Situaciones como esta reafirman las tesis sobre la consolidación de una estrategia de unificación de estas estructuras al mando de antiguos jefes paramilitares para la retoma del territorio que se ha denominado “Nuevo Bloque Costeño”.

En este sentido, el **Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPS Seccional Barranquilla** ha denunciado la afectación los derechos de la población por cuenta de estas estructuras criminales por medio de desplazamientos, desapariciones forzadas, homicidios selectivos, estrategias de terror (desmembramiento) reclutamiento y utilización de Niñas, Niños y Adolescentes - NNA, trata de personas y violencia sexual, entre otras situaciones.

Este escenario es altamente riesgoso para las organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos que acompañan procesos de exigibilidad de derechos. De acuerdo al Boletín Trimestral del Programa Somos Defensores - PSD, entre enero y marzo de este año, se han presentado al menos 27 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, entre las que se cuentan homicidios, desplazamientos forzados, hostigamientos y robo de información, entre otros hechos.

De igual modo, hay preocupación por la negociación o el sometimiento que se está llevando a cabo en el territorio, con el Decreto 601 del 2020 que permite que el Alto Comisionado para la Paz – ACP, adelante el sometimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO); sin embargo, en los territorios esto se ha traducido en que estos grupos luego de “someterse” sin ningún aporte de verdad ni reparación a sus víctimas gocen de tranquilidad y no haya una persecución real.



Imágen tomada de www.expotur.com.co



Collage realizado sin fines de lucro con imágenes tomadas de:
JusticiaYPazColombia.com (AGC); OpinionCaribe.com (Pancarta);
dapre.presidencia.gov.co (Decreto 601 de 2020); Narcosfamosos.com
 (Logo CDS)

Aparece en este contexto, los intereses históricos de grupos armados en la ciudad de Barranquilla, como eje central en el contexto caribe; ya que en ella se proporciona conectividad entre el norte y sur de la región y de esta para con el resto del país. Estas ventajas geoestratégicas han sido aprovechadas por grupos armados ilegales para consolidar su accionar en el nivel regional. De esta forma, Barranquilla se ha posicionado como un sitio de concertación y fortalecimiento de las estructuras criminales que se proyectan a toda la región, siendo un corredor estratégico y un territorio que facilita el aprovisionamiento logístico y militar. Contexto que también se hace evidente en el departamento del Magdalena y la Guajira.

La pandemia por COVID-19 y el aislamiento social no solo han evidenciado las condiciones de vida precarias en las que se encuentran los defensores, sino que ha profundizado las debilidades existentes en la política de prevención y protección a esta población como la implementación de esquemas de seguridad y rondas policivas. De igual modo, se ha denunciado la represión por parte de la Fuerza Pública ante manifestantes de los municipios de Guachaca y Plató, Magdalena por falta de ayudas humanitarias, y precariedad en el saneamiento básico y el sistema de salud.

Aunque las organizaciones y plataformas de Derechos Humanos del Nodo Caribe han insistido en la interlocución con los gobiernos locales, a fin de diseñar una ruta expedita para la prevención de violaciones a los derechos humanos, como ha sido la reactivación de las mesas territoriales de garantías, estas autoridades han estado de espaldas a esta situación, lo que pone en evidencia la ausencia de voluntad política para superar el contexto de riesgo antes descrito.

De igual forma, en el departamento de Sucre, las labores de incidencia y denuncia se vienen realizando a través del espacio de **Mesa Sucreña por la Paz** y en Córdoba se han llevado a cabo talleres de protección con líderes y lideresas sociales, pues el sur de Córdoba es una de las regiones con mayor presencia paramilitar y asesinato de líderes, en medio de una militarización intensa y una fuerte represión al movimiento campesino.,



Imagen tomada de www.rcnradio.com.

Nodo Centro

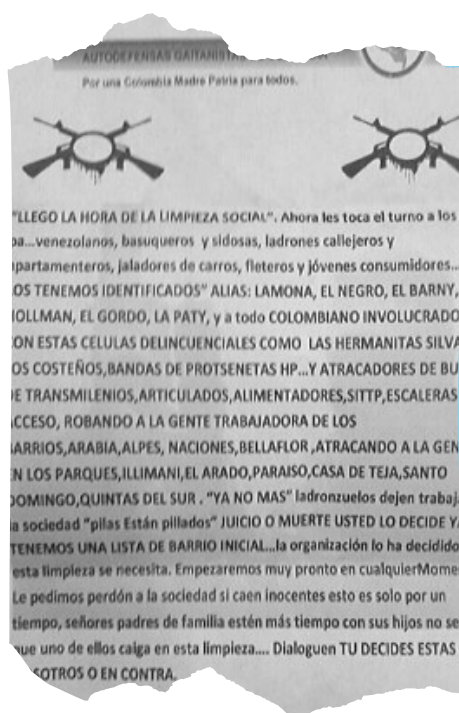
CRISIS HUMANITARIAS Y DE DDHH EN LOS DISTINTOS NODOS DE ACTUACIÓN DE LA CCEEU

Una grave situación de derechos humanos se registra en Bogotá, Cundinamarca, Huila, Tolima, Caquetá, Caldas, Quindío, Boyacá, Casanare y Meta, regionales del nodo centro, caracterizados por similares vulneraciones a las que atraviesa el resto del país en un contexto cruzado por una rica y diversa movilización social, sectorial y poblacional, expresada en acciones de protesta y exigibilidad. Con gran presencia desde el mes de noviembre con el Gran Paro Nacional, miles de personas se congregaron alrededor de la lucha por la implementación del Acuerdo y sus componentes, así como el rechazo del marchitamiento por parte del gobierno Duque de los distintos escenarios de reincorporación y la proliferación de grupos armados con control local en vastas regiones del nodo.

De acuerdo al **Colectivo Sociojurídico Fals Borda**, miembro CCEEU, el aislamiento obligatorio preventivo ha expuesto con crudeza las dificultades estructurales e históricas en el mercantilizado sistema de salud; este aislamiento junto con las medidas de “distanciamiento social” no han impedido que sigan ocurriendo hechos de amenaza, persecución y asesinato de líderes sociales y excombatientes FARC, así como acciones que atentan contra la tranquilidad y el buen vivir de las comunidades.

Además, se observa una evidente reestructuración de los grupos armados en la región, tanto paramilitares como también de las llamadas disidencias, circulando libremente por el territorio y ejerciendo un control de estas zonas; situación que ha reforzado con violencia la restricción de tránsito de personas, la realización de empadronamientos, el aumento de la extorsión y otras acciones de control.

Según el Registro Actualizado Permanente de INDEPAZ a 03 de junio, 16 líderes sociales y/o defensores de DD.HH han sido asesinados durante 2020 y los procesos en que actuaban están bajo amenaza. De igual modo, como respuesta a este liderazgo, se evidencian patrones de persecución y hostigamiento afectando procesos de restitución de tierras, defensa de áreas protegidas ambientalmente, sustitución de cultivos de uso ilícito, lucha por la titulación de bienes baldíos a favor del campesinado y la participación de la Acción Comunal en el dinamismo de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



Desde el FCSPP Seccional Bogotá, en el mes de abril se denunció públicamente la presencia e intimidación por parte de actores armados ilegales en la localidad de Ciudad Bolívar. Pese a que la comunidad acudió a la policía para denunciar el hecho, este no se tomó en cuenta.

Imagen tomada de: <http://www.comitedesolidaridad.com/es/content/amenazas-de-grupos-armados-en-ciudad-bolivar>



Imágen tomada de www.rcnradio.com

Aunado a esto, se ha denunciado el reclutamiento forzado de menores de edad y jóvenes, por parte de los grupos armados, además de robo de información y asaltos a sedes de organizaciones sindicales, políticas y juveniles.

Existe una enorme preocupación alrededor de la **Operación Artemisa**, que se anunció como estrategia para la recuperación de los Parques Nacionales Naturales contra los campesinos y colonos que los habitan, debido a que con dicha intervención se están generando violaciones a los derechos humanos.

En el contexto de pandemia, los ataques y violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales están preponderantemente asociados a: **1)** La crítica situación carcelaria agravada por la rápida expansión del Covid-19 en condiciones de extremo hacinamiento y la ausencia crónica de políticas de salubridad que permitan contenerlo; **2)** Violación, estigmatización y represión del derecho a la protesta, y uso indiscriminado del ESMAD en respuesta a las expresiones de inconformidad de pobladores que exigen suministro de alimentos para sus familias durante la cuarentena; **3)** Continúan los asesinatos de líderes sociales, defensores de DD. HH y excombatientes; **4)** Capturas masivas, ametrallamientos, daños a bienes e inmuebles y a cultivos de pan coger, y estigmatización por parte del ejército contra las comunidades campesinas de la región de la Macarena (Meta); **5)** Incursión paramilitar acompañada de amenazas de muerte contra pobladores de ciudad Bolívar a través de un panfleto de las AGC y en Bosa; **6)** Interceptaciones ilegales, seguimientos y, en general uso criminal de la inteligencia del estado contra periodistas y organizaciones de DDHH.



Collage realizado sin fines de lucro con imágenes tomadas de: Las2Orillas.com (Nota de prensa); ElConfidencial.com (Personas en Confinamiento); Colectivodeabogados.org (Protestantes y pancarta)

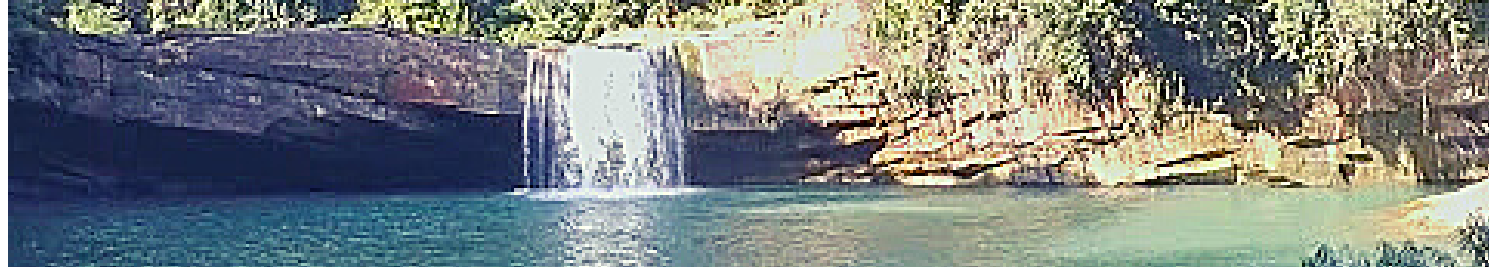


Imagen tomada de www.centrodememoriahistorica.gov.co/

Nodo Nororiente

CRISIS HUMANITARIAS Y DE DDHH EN LOS DISTINTOS NODOS DE ACTUACIÓN DE LA CCEEU

En el departamento de Santander persisten la persecución política, abuso de autoridad, intolerancia social y dinámicas de agresiones contra líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio y demás procesos sociales que se oponen a la minería a gran escala y al fracking (explotación de hidrocarburos con fracturación interna del subsuelo).

A pesar que el Gobierno departamental viene desde hace algún tiempo negando que en el departamento exista presencia de actores armados los hechos demuestran lo contrario: el ELN tiene presencia en el Magdalena Medio Santandereano en especial en Barrancabermeja y la provincia de García Rovira (Concepción, Cerrito, Capitanejo, San Andrés y Málaga), región que tiene frontera con el departamento de Boyacá, también con presencia de este grupo. Para el mes de febrero panfletos amenazantes comenzaron a circular en esta provincia; pese a que estos hechos fueron desmentidos por el Gobierno Departamental las comunidades siguen alertando la presencia de hombres armados, vestidos de camuflado y con señales distintivas de este grupo.

En Barrancabermeja y los demás municipios del Magdalena Medio Santandereano, también se ha identificado presencia del ELN y estructuras sucesoras del paramilitarismo quienes han emitido panfletos amenazas a líderes y lideresas de barrios de sectores populares del Puerto Petrolero, incluso, a través de WhatsApp.



La Fuerza Pública con algunas comunidades, en especial del área rural, ha creado una red de informantes, quienes, según denuncias de la comunidad, han sido dotados con armas y radioteléfonos. En estas zonas se han venido presentando amenazas a personas de nacionalidad venezolana y agresiones a jóvenes consumidores de estupefacientes.

En Arauca coexiste una amalgama de actores armados, el ELN (con los Frentes “Camilo Cienfuegos” y “Domingo Laín”), las disidencias FARC (con el Frente Décimo “Martín Villa”), un grupo venezolano denominado Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional FPLN, estructuras sucesoras del paramilitarismo, contrabandistas, narcotraficantes y delincuentes comunes. Todos estos grupos ejercen control sobre la vida social, política y económica de Arauca estableciendo una serie de “normas” como toques de queda, regulación de las actividades cotidianas como la pesca, el cobro de deudas y los horarios de cierre de bares. Estos grupos actúan en connivencia con fuerzas de seguridad venezolanas y autoridades locales.

En Norte de Santander, se evidencian las dinámicas del conflicto armado en donde se destacan las confrontaciones entre ELN - EPL y entre ELN - Rastrojos., enfrentamientos que han generado desplazamientos forzados en el marco de una crisis humanitaria y de una falta de respuesta institucional.

Mapa con los principales actores armados ilegales en el nodo (verde), resaltando la presencia de tropas norteamericanas en las Zonas Futuro.

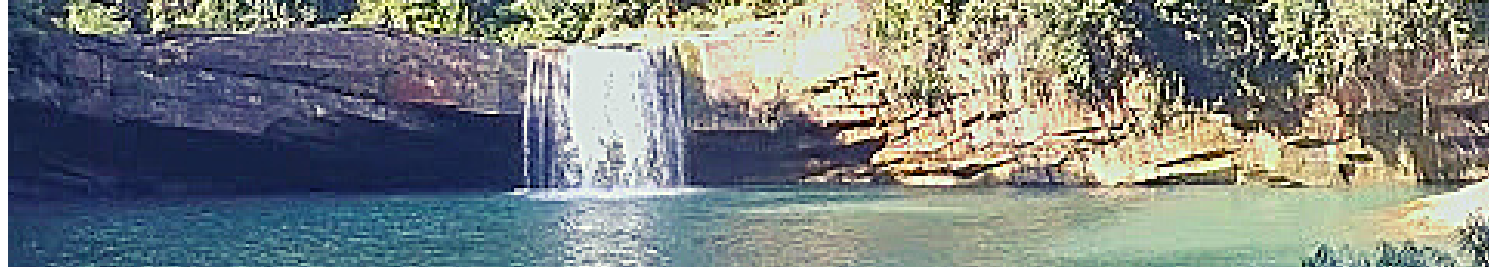


Imagen tomada de www.centrodememoriahistorica.gov.co/

Preocupa que las medidas adoptadas por las comunidades de restringir el acceso a los municipios, facilita los procesos de reorganización para la confrontación armada.

Detrás de la mayoría de los asesinatos ocurridos en Bucaramanga y su área metropolitana, se encuentran narcotraficantes que actúan con aquiescencia de la policía. Adicionalmente, las medidas de protección por parte del Gobierno a líderes y lideresas, personas defensoras de derechos humanos y otras personas particularmente expuestas a ataques por parte de grupos armados, han sido limitadas, evidenciándose una estrategia de agresión contra el movimiento social en Arauca, Santander y Norte de Santander.

Con las medidas de aislamiento obligatorio por COVID-19, esta exposición se ha intensificado pues el confinamiento es el escenario perfecto para que las amenazas en su contra se materialicen especialmente en contextos rurales del Catatumbo donde la ausencia de respuesta institucional en materia de protección sanitaria y asistencia alimentaria, ha obligado a la comunidad a tomar acciones para garantizar su protección.

La crisis derivada del COVID-19 ha sido aprovechada por el Gobierno de Duque para adelantar procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en las zonas rurales de los municipios de Cúcuta, Tibú y Sardinata, labores que han generado malestar social en las comunidades, conllevando a situaciones de confrontación y tensión con la fuerza pública, lo que ha arrojado un saldo de tres campesinos detenidos y uno asesinado por el Ejército en el municipio de Sardinata.

Adicionalmente, las comunidades campesinas han denunciado que un grupo de 36 militares que participaban en labores de erradicación y otras operaciones en la región, fueron puestos en cuarentena tras dar positivo en pruebas de COVID-19, por lo que se ha expresado la preocupación frente al despliegue militar como foco de propagación del virus en las comunidades campesinas. Las preocupaciones se intensifican con el anuncio de la llegada de 800 tropas bajo el mando del Comando Sur de los Estados Unidos, no sólo por la intensificación de operaciones militares en contra de la resistencia campesina al incumplimiento de los acuerdos, sino también por los riesgos de afectación sanitaria a la población.

Así mismo, el Gobierno de Duque adelanta procesos de consulta virtual en la región del Catatumbo para retomar la fumigación de cultivos de uso ilícito con Glifosato, situación que ha generado profundo malestar en las organizaciones campesinas, quienes han anunciado la convocatoria a un paro campesino si estas consultas y procesos de erradicación no se detienen.

La ausencia de alternativas para reactivar la economía y el cierre de los pasos fronterizos ha dejado a la población colombiana y venezolana que depende de la economía informal y del día a día, a merced de los actores armados, facilitando procesos de vinculación a estructuras armadas, redes de microtráfico y de trata de personas."

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH y Corporación Compromiso

NODO NORORIENTE - CCEEU

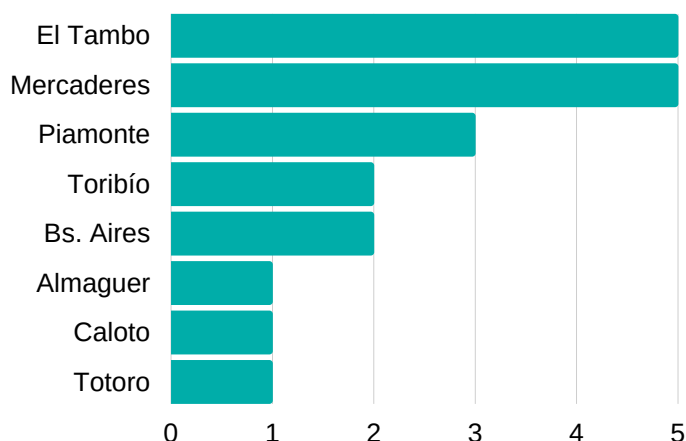


Imágen tomada de www.radiosuperpopayan.com

Nodo Suroccidente

CRISIS HUMANITARIAS Y DE DDHH EN LOS DISTINTOS NODOS DE ACTUACIÓN DE LA CCEEU

Homicidios personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos durante COVID-19 en el Cauca



Entre finales de marzo y los primeros días de mayo, 20 personas líderes sociales, defensoras de Derechos Humanos y familiares han sido asesinadas en el Departamento. Sus asesinatos se ubicaron en 8 de 25 municipios. Fuente: Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia "Francisco Isaías Cifuentes" et al. 2020.

Como parte de este nodo, los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca comparten características no solo ecosistémicas, culturales y económicas sino que también, padecen los efectos del abandono estatal, la persistencia de economías ilegales, la pobreza, la estigmatización de las comunidades indígenas y afrodescendientes, los altos niveles de militarización, corrupción, narcotráfico, minería y reclutamiento de NNA y migrantes venezolanos.

El abandono de los territorios por parte de las FARC-EP, dio lugar al surgimiento de disputas y alianzas entre diversos grupos interesados en el control del territorio para retomar las rutas del tráfico de droga y armamento. Entre estos grupos se encuentran: **1)** Residuales FARC: **a)** Frentes de las disidencias como "Oliver Sinisterra", "Jaime Martínez", "Dagoberto Ramos", "Carlos Patiño", "Ismael Ruiz", N° 6 y 48, algunos en confrontación con "Los Contadores", en Nariño o en alianza con narcotraficantes internacionales como "Los Sinaloas" en Putumayo; **b)** Otros grupos como las "Guerrillas Unidas del Pacífico" y "Los Contadores";

2) Narcoparamilitares: Águilas Negras, Clan del Golfo, AGC; **3)** Neo-paramilitares como "La Constru", "La Cordillera" y "La Mafia" **4)** Guerrilleros como ELN: Frente de Guerra Suroccidental, "Camilo Cienfuegos, entre otros en confrontación con paramilitares; **5)** EPL; **6)** Fuerzas militares y de policía, incluyendo el ESMAD.

Todos ellos contribuyendo al incremento y complejización de los repertorios de violencia socio-política dirigidos a campesinos, migrantes venezolanos, ex-combatientes (cuyo ETCR en Pueblo Rico, Risaralda se encuentra en estado deplorable) y personas defensoras de derechos humanos, situando al nodo en el primer lugar en materia de agresiones a defensores con 70 de un total de 245 a nivel nacional durante el primer trimestre de 2020 (PSD, 2020)

Al igual que en los demás territorios, el COVID-19 junto con las medidas de aislamiento obligatorio, han puesto en evidencia la débil articulación interinstitucional, el avergonzante sistema de salud y las múltiples violencias las cuales afectan de manera diferenciada a comunidades de mujeres, campesinas, afro, indígenas que construyen día a día territorio en el nodo. Todo esto, ha agudizado la ya difícil situación de derechos humanos trayendo consigo una crisis humanitaria ya denunciada años atrás.

Con cinco masacres, cuatro de ellas durante el mes de abril, el departamento del Cauca, al igual que Nariño, Putumayo, Risaralda y Valle del Cauca han hecho frente a los casos ascendentes de contagio emprendiendo ,



Imágen tomada de www.radiosuperpopayan.com/

acciones como: estrategias de salud autogestionadas, control territorial autónomo para evitar la expansión del virus, protestas de rechazo a los programas de erradicación forzada del Gobierno, los cuales se han intensificado y exigencia de derechos laborales y ayudas humanitarias para sortear la situación; no obstante, estas han sido frenadas debido a: **1)** amenazas de empresarios y bandas como "La Empresa" hacia la comunidad de Bajo Calima, Valle del Cauca; **2)** amenazas a los gremios sindicales bancarios en la ciudad de Pereira, Risaralda; **3)** retenes, enfrentamientos e intimidaciones de la Fuerza Pública hacia indígenas y campesinos en Florida y Pradera-Valle del Cauca, en diversos de Putumayo y Cauca donde la guardia hace presencia y en Tumaco - Nariño donde el indígena Awá, Artemio Nastacuas perdió la vida: **4)** Uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte del ESMAD y las FF.MM. ante las protestas pacíficas de civiles en ciudades como Cali, y las áreas rurales del departamento de Putumayo. Esta práctica de uso desmedido ha traído consigo la muerte del joven Anderson Arboleda, a manos de la policía en Puerto Tejada, Cauca.

Ayudas Humanitarias gubernamentales como las prometidas meses atrás por parte del presidente Duque y el Ministerio del interior, jamás llegaron pese al trabajo incansable de la CCEEU y sus organizaciones en el envío de la información requerida. Esto, confirma que la respuesta del Gobierno Nacional, en lugar de una atención integral a las garantías y los derechos de las comunidades, ha sido el refuerzo de activos de los grupos armados legales ya mencionados, dejando el territorio a merced de los violentos pues según lo denunció el CCAJAR, el pasado 9 de abril: "los actores armados estarían amenazando con asesinar a quienes resulten con síntomas del COVID-19, como medida de control de la pandemia".

No obstante, y a pesar de la afectación a los distintos procesos organizativos, estos han continuado impulsando la implementación integral de los acuerdos de paz, la exigencia de compromisos humanitarios, la reactivación de la negociación con el ELN y la visibilización de las vulneraciones a los derechos humanos. De igual modo, mecanismos del Proceso Nacional de Garantías como las Mesas Territoriales de Garantías, que contienen exigencias y compromisos entre el Gobierno Nacional y las organizaciones locales en materia de derechos humanos, están a la espera de ser reactivados con amplia participación de la sociedad civil para así dar lugar a estrategias efectivas que disminuyan la situación de violencia del día a día.



Marco Rivadeneira, líder social, vocero de la Mesa Territorial de Garantías y miembro del Comité Operativo de la CCEEU.

Fue asesinado en el mes de marzo por enemigos de la paz y por la falta de garantías para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos por parte del Estado Colombiano.

Su vida de resistencia y lucha es un ejemplo para el gremio de DDHH.





Amazonas

ANÁLISIS ESPECIAL DE CRISIS HUMANITARIAS Y DE DDHH

Como una zona sin frontera, el Amazonas integra más que Leticia y en su lejanía con el epicentro del país ha encontrado el abandono y la desidia del Estado, al mismo tiempo que la corrupción, el narcotráfico, la minería, la deforestación, la contaminación y la violencia de manos de grupos armados y bandas como las disidencias y “Los Urabeños” la han encontrado a ella. Por esta razón, desde el pasado 19 de agosto de 2019, la **Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana - Opiac** declaró Estado de Emergencia resaltando la grave situación humanitaria que viven las comunidades en la región, entre ellas, la sistematicidad en los asesinatos de líderes y lideresas indígenas y la contaminación de sus aguas por mercurio.

De igual modo y, en contravía a lo prometido por el Gobierno ante la CIDH de implementar un “Plan de acciones urgentes en los territorios indígenas para la mitigación de la pandemia COVID-19 y para el autocuidado propio en el marco del SISPI en coordinación con el SGSSS”, la situación en medio del confinamiento parece agravarse. Con cerca de 2.000 casos de contagio, siendo la mayor tasa de contagio por población, la respuesta del Estado ha sido la militarización en la frontera brasilera y la prohibición del tránsito entre países, dejando de lado una comprensión integral del territorio en esta zona.

Según lo señala Enrique Gómez, integrante de la **CUT Amazonas**, aún existen nueve zonas no municipalizadas a la espera de ayudas humanitarias por parte del Estado y las carencias en derechos como la salud y el agua se hacen más notorias; ante esto, la población indígena ha hecho uso del agua lluvia y de la medicina ancestral para contrarrestar los efectos del COVID-19 en sus comunidades.

De igual modo, la situación es crítica para la población carcelaria de Leticia donde el número de contagiados asciende a 143 de un total de 181 reclusos. Esta situación, ha llevado a que la **Federación Nacional de Departamentos** implementara la campaña **S.O.S Amazonas** debido a la gran vulnerabilidad que vienen enfrentando los pueblos indígenas y que se incrementa debido a la pandemia.

"La Comisión de la Verdad se suma a este SOS por la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía con estos dos llamados:

1) Al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y a las instituciones regionales y nacionales para que de manera apremiante atiendan las peticiones elevadas a través de las organizaciones indígenas nacionales como la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Confederación Indígena Tayrona (OCIT) y el Gobierno Mayor, para dar vía al pliego de peticiones del “Plan de acciones Urgentes en los territorios y pueblos indígenas para la mitigación de la pandemia COVID-19 y para el autocuidado propio”, al que también se suman en solidaridad y solicitud los obispos de la Amazonía y Orinoquía colombiana entre otros sectores, universidades, académicos y gremios, a través de comunicados, pronunciamientos públicos y campañas.

2) De igual manera, para que el gobierno de Colombia de manera articulada con los gobiernos de Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela se tomen medidas eficaces entre todos los países a fin de mitigar y detener el avance de la pandemia hacia los territorios de fronteras de los países de la Panamazonia habitados por los pueblos indígenas.."



Imagen tomada de: www.eltrato-choco.gov.co

Chocó

ANÁLISIS ESPECIAL DE CRISIS HUMANITARIAS Y DE DDHH

Siendo uno de los municipios con las poblaciones más empobrecidas de Colombia y ubicándose en una valiosa zona estratégica en recursos, etnias y rutas, el departamento del Chocó ha vivido históricamente el abandono del Estado y la violencia armada protagonizada por actores armados legales como el Ejército e ilegales como las AGC, y el ELN (con gran presencia en el territorio) y algunas bandas delincuenciales dedicadas al hurto, el sicariato y la extorsión como Los Chacales. De igual modo, dinámicas de violencia como el confinamiento, el desplazamiento, los reclutamientos forzados, las amenazas, los asesinatos y las agresiones han incrementado la situación de vulnerabilidad en los municipios, poniendo contra la pared a líderes/as, personas defensoras y excombatientes reincorporados.

De acuerdo al informe de OCHA sobre la **Situación Humanitaria en el Medio Atrato**, al menos 244 personas se encontraban en confinamiento en febrero de este año por cuenta de estos grupos, limitando su acceso a la tierra y la alimentación. Aunado a esto, según la **Red Departamental de Mujeres**, el aislamiento obligatorio por cuenta de la pandemia, ha aumentado el temor y la zozobra de la población de Bahía Solano, Nuquí y Juradó pues los panfletos amenazantes por quebrantar el aislamiento obligatorio provienen de diversos grupos armados, dificultando las posibilidades de la población de dar respuesta, especialmente, a su seguridad alimentaria y la de sus familias.

Con más de 392 casos de contagio para inicios de junio (Secretaría Departamental de Chocó), el sistema de salud muestra las grandes carencias del departamento pues luego de enfrentarse al cierre de uno de sus hospitales y la remoción del Secretario de Salud por inconsistencias en las contrataciones, se suma la persecución de los grupos armados a aquellos que resulten contagiados, por tal razón, el portal **La Liga Contra El Silencio**, denunció a principios del mes de mayo el ocultamiento de la información de casos en el departamento con el propósito de que estos no fueran rastreados y perseguidos.

Este escenario, que incluye 90 personas asesinadas en los cinco primeros meses del año, entre ellos, el guardia Indígena Anuar Rojas, el excombatiente José Cuestas situación que parece no tener control a pesar de los constantes llamados de alerta hechos por el Sistema de Alertas Tempranas - SAT de la Defensoría del Pueblo, personas y organizaciones defensoras. Estas últimas, se han mantenido en pie y buscando la articulación en el espacio de sociedad civil donde se convoca con el fin de buscar salidas efectivas a este escenario de complejidades.



Collage realizado sin fines de lucro con imágenes tomadas de: rcnradio.com (Hospital); Indepaz.org.co (AT016-20); ONIC (Emberas en Chocó)

ASÍ SE HA PRONUNCIADO LA CCEEU EN 2020

A continuación encontrarás los titulares de los últimos comunicados de la CCEEU:

1. "La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, rechaza el asesinato de su dirigente en el Putumayo MARCO RIVADENEIRA" - 19 de marzo de 2020
2. "127 organizaciones, 2 plataformas de derechos humanos y 306 personalidades postulan a Liliana María Uribe Tirado y a Ivonne Suárez Pinzón a la Comisión de la Verdad" - 24 de marzo de 2020
3. "Saludamos el cese al fuego acordado por el ELN y exhortamos a retomar la vía de la solución negociada" - 30 de marzo de 2020
4. "Organizaciones, movimientos y personas solicitamos al Tribunal Permanente de los Pueblos que sesione en Colombia este año" - 1 de abril de 2020
5. "La orden de la Procuraduría General de la Nación a los alcaldes pone en riesgo grave la identificación de miles de personas desaparecidas y el derecho a la verdad" - 6 de abril de 2020
6. "Rechazo y preocupación por las estrategias previstas por la Alcaldía de Medellín frente al COVID-19 desde el Nodo Antioquia" - 20 de abril de 2020
7. "Petición de la Unidad De Víctimas a la JEP desconoce los derechos de las víctimas de desaparición forzada" - 21 de abril de 2020
8. "Ministerio del Interior no cumple con las ayudas prometidas a líderes y lideresas sociales"- 9 de mayo de 2020
9. "Plataformas de derechos humanos rechazan nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar como coordinador del Grupo de Articulación Interna para la Política de víctimas del Ministerio del Interior" - 19 de mayo de 2020
10. "Las desapariciones forzadas no son una historia del pasado, son una realidad del presente" - 26 de mayo de 2020
11. "La llegada a Colombia de tropas de los Estados Unidos es un atentado contra la democracia y la soberanía del pueblo colombiano" - 5 de junio de 2020
12. "Exigimos garantías y debido proceso para defensora de DDHH Yolanda González de Saravena, Arauca" - 9 de junio de 2020

Entérate de más información y encuentranos en



@coeuropa



Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos



www.coeuropa.org.co



coeuropa@coeuropa.org.co